

El núcleo en torno al que van a girar la mayor parte de los principales acontecimientos del mes de agosto será el **paro nacional** convocado por el Frente Democrático Revolucionario para los días 13, 14 y 15 del mes, y que fuera pospuesto el mes anterior por no estar suficientemente coordinado. Este acto va a significar un momento especial en el enfrentamiento político entre el gobierno y sus aliados, por un lado, y la oposición organizada, por el otro.

Ya el solo anuncio del paro que se efectuaría en esos días produjo de inmediato la reacción oficial que intentaría evitarlo o disminuirlo. El Ministerio de Defensa promete seguridad e intensificación del patrullaje; el Ministro de Trabajo insta a todos a que abran los centros de trabajo y a que vayan a cumplir con su obligación, a la vez que amenaza con aplicar las sanciones del Decreto 296 y del Código; el sector productivo también invita a trabajar y dice que el paro es una medida absurda y desesperada, y ratifica que la Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad darán las garantías necesarias.

En las vísperas de que se realice, el gobierno dice que el paro vendrá a ser un "Referendum Popular", y algo similar dice en su homilía Mons. Rivera al desear que significara una especie de "plebiscito" en el que todos se pronunciaran libremente a favor o en contra, y que se dieran las condiciones de libertad y de no coacción de ninguna de las partes; palabras que fueron instrumentalizadas por un miembro de la Junta, el Dr. Avalos, y por el alcalde capitalino Rey Prendes para los intereses oficiales, por lo que protestara enérgicamente después Mons. Rivera. El gobierno tratará de controlar la capital, principalmente, para dar una imagen internacional de normalidad y de fracaso del paro, por lo que va a presionar para que circule el transporte público, amenazando a los trabajadores del sector y dando protección armada, e incluso ofreciendo el pago de los daños que se ocasionen en tal oportunidad (a pesar de todo serían quemadas 78 unidades), y el mismo Duarte pide a los pick-ups y demás transportes privados que colaboren. Otro de los sectores importantes para la imagen es que el comercio abra, para lo que el ejército también ofrece garantías. Se aprovechan hasta los últimos instantes todos los medios para intensificar campañas oficiales en este sentido.

El Ministro de Trabajo, el de Educación y las autoridades del Seguro Social amenazan con el Decreto 296 y otras sanciones. La Junta de Go-

bierno, con la excepción de Majano, que no se presta al juego —lo que indica la división interna— visitan los cuarteles, llevando Duarte la iniciativa en las arengas.

También los directores de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional toman la palabra en los medios de comunicación para sostener las tesis del gobierno; mientras tanto Abdul Gutiérrez visita los Cuerpos de Seguridad y hace una serie de promesas, como el poder realizar desde ahí la carrera militar, y afirma a un tiempo que hay abundantes solicitudes para esos cuerpos.

La empresa privada se suma a las voces oficiales y, lo que llevaba meses sin verse en los medios de comunicación, aparecen campos pagados de la Cámara de Comercio e Industria, de la ANEP, ASI, y la Sociedad de Comerciantes e Industriales, apoyando las posturas oficiales y exhortando a acudir al trabajo y no apoyar el paro de las "organizaciones comunistas".

De hecho, durante los días del paro, al menos en la capital, hubo un aspecto de relativa normalidad, ya que había tráfico público y privado, tal vez un 40% de las oficinas estaban abiertas, y el comercio en su mayoría se encontraba entreabierto, es decir, abierto pero con precauciones, ya fueran de persianas a medio bajar, partes semicerradas de cada negocio, pero la afluencia de público en las zonas céntricas y populares era mínima. El primer día, cerca del mediodía, los miembros de la Junta, menos el coronel Majano nuevamente, hicieron un recorrido a pie por el centro de la ciudad, acompañados del alcalde y de unas docenas de seguidores que se abrazaban y los levantaban en hombros, y unos mariachis contratados para alegrar la comitiva y dar impresión de absoluta normalidad; cosa que no se percibía en la periferia popular y en los municipios alejados, donde hubo también acciones violentas. Aparte del paro puramente laboral y pacífico, se registraron 445 acciones violentas en todo el país, entre acciones de sabotaje (las principales al tendido eléctrico), diversas tomas, barricadas y acciones militares. También la represión en esos días fue muy elevada, con 105 bajas de la población civil, sin contar los caídos de ambos bandos en enfrentamientos armados o "ajusticiados". Todo esto hace que el paro no fuera una acción puramente político-laboral, sino más bien una nueva fase en la lucha entre ambos contendientes, o porque así fuera planeada, o porque el desarrollo del mismo obligara a pasar de la pasividad a la "defensa justa del pueblo

reprimido", como dirían los dirigentes de la izquierda.

Después del acontecimiento, se hizo un balance del mismo. El gobierno, por intermedio de Morales Ehrlich, dijo que había sido un triunfo del pueblo que quiere trabajar y no desea la violencia, pero añadió que hubo 100 muertos, 8 torres de alto voltaje destruidas, 24 buses quemados, lo que no impidió que hubiera sido un fracaso del llamado, y que obligó a la izquierda a recurrir a la violencia. Majano, en cambio, opinó que había un incremento insoportable de la violencia, originada por la derecha, que hay que mejorar las Fuerzas Armadas para que estén al servicio del pueblo, y que en lo que va del año el gobierno había tenido 303 bajas. El embajador White, se adhirió a las tesis del gobierno pero, según el Newsweek, si los militares fracasan en el actual proyecto hay pocas alternativas para El Salvador. De parte de la Fuerza Armada, el Ministro de Defensa habló del fracaso de la izquierda y elogió a la Fuerza Armada que sabe cómo dirigir tales situaciones; también se refirió, junto con el subsecretario Carranza, a que los del FDR son violentos y contrarrevolucionarios, pues la verdadera revolución la está haciendo la Fuerza Armada. Y el director de la Policía de Hacienda dijo que la Fuerza Armada y el pueblo están unidos, y que aquélla tiene una unidad granítica.

La Empresa Privada, por medio de la Alianza productiva y la Cámara de Comercio e Industria apoyó las tesis oficiales, tanto del gobierno como de la institución castrense. Para probar el fracaso del paro hizo unas encuestas entre un grupo de empresas, y los resultados arrojaban un porcentaje próximo al 100% de asistencia al trabajo, por lo que la izquierda acudió a las venganzas contra los que trabajaron en esos días.

Mons. Rivera, en su homilía posterior al paro, sostuvo que no había sido un referendun, al no darse las condiciones de ninguna de las partes: la coacción oficial y el amedrentamiento de los convocadores; sino que más bien había conducido a un incremento de los enfrentamientos, así como de los refugiados, como consecuencia de éstos, por lo que pedía respeto a los lugares de refugio. También condenó el que fueran bombardeados por el aire San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango, y la población rural de Aguilares.

Para el FDR, en cambio, el paro fue un gran éxito, a pesar de las medidas desesperadas adoptadas por el gobierno para abortarlo, y que el pueblo había actuado en legítima defensa, en lo

que había dado un nuevo paso.

Para los observadores internacionales, la opinión no estuvo muy clara, y hubo muchos que lo tuvieron por menos exitoso de lo que se esperaba, es decir, por parcialmente fracasado, mientras que otros tuvieron el paro como una pantalla para una fase nueva en la lucha armada. Tal vez la opinión de Adolfo Gilly, del periódico Uno Más Uno de México, sea la más atinada, al decir que esa fue una "huelga límite", entre la clásica y la insurreccional.

El Paro Nacional, como indicaba al comienzo, es el núcleo del mes. Varios de los sucesos previos se pueden entender en perspectiva al mismo, así como los posteriores, que presentaremos en primer lugar.

Después de los días del paro se incrementaron las medidas del control y de represión, como era de esperarse. Los retenes militares se multiplicaron, así como los patrullajes incluso blindados; en uno de los retenes fue herido el Vicecónsul norteamericano, a quien defendió su embajador diciendo que había sido un imprudente, lo que se suma al nerviosismo imperante en el país. En Santa Ana se intensificó el patrullaje. El Socorro Jurídico del Arzobispado denunció un operativo de 3.000 efectivos en San Antonio Abad y en los poblados alejados ubicados en las faldas del volcán de San Salvador. El COPREFA anuncia la investigación de una clínica clandestina en San Miguelito. FUSS y FESTIAVCES denuncian cateos a sus locales y capturas de dirigentes del sindicato de transportes, y el MLP denuncia el cateo de una casa en la colonia Escalón; donde fuera capturado un alto dirigente de dicha organización cosa que desmiente el boletín oficial. Se incrementan las acciones de insurgencia y de contrainsurgencia en todo el país. Hay dos atentados llamativos, uno contra el Sr. Dutriz, de La Prensa Gráfica, y otro contra el Ministro de Obras Públicas. Por último, el gobierno inicia una intensa campaña acerca de que hay mercenarios extranjeros (por supuesto, en las filas de la izquierda y en sus campamentos militares), y de que tiene pruebas de que corresponsales extranjeros están involucrados en eso.

Pero el acontecimiento más importante en el postparo será el corte de la energía eléctrica en todo el país: a consecuencias del paro fueron despedidos 30 trabajadores del ramo, por lo que el sindicato presentó un pliego y pidió negociaciones a los funcionarios correspondientes de CEL, pero pasados tres días sin respuesta, el 21



DESTRUCCION DE MAQUINAS

En más de 100 mil colones se calculan las pérdidas causadas ayer en 10 autobuses, 4 de la ruta 22 y 6 de la 1, cuando se encontraban en sus respectivas terminales. Se informó que la Asociación Cooperativa Indepen-

diente de Transporte (ACIT), ha sido la más afectada desde el 13 de agosto. "Se le han destruido 32 unidades", informaron.

de agosto, tras avisar por las radiodifusoras previamente, cortaron la energía desde las 3.30 p.m. por tiempo indefinido; las negociaciones comenzaron apresuradamente, pero tras 24 horas el centro principal de concentración de dirigentes del sindicato, en Soyapango, fue tomado por la Guardia Nacional, sin disparar un sólo tiro —de acuerdo a las versiones oficiales—, y sin que hubiera acciones de sabotaje como defensa o represalia, y los 16 principales dirigentes fueron capturados y restablecida la corriente; inmediatamente fue aplicado el Decreto 43, de Estado de Emergencia, y fueron militarizadas, además de la CEL, otras importantes entidades autónomas, como CEPA, ANDA Y ANTEL. Duarte y el Ministro de Trabajo salieron a los medios de comunicación a condenar el corte de energía, así como la empresa privada, que afirmó que el corte había supuesto una pérdida de 30 millones de dólares. A los responsables, dijo Morales Ehrlich, se les aplicaría las sanciones correspondientes, y se aplicó la justicia militar en base a la militarización que fue aprobada, por lo visto, con carácter retroactivo, contra todo derecho.

Mons. Rivera condenó las medidas del gobierno, pues dijo que el apagón había sido una acción política, a la que se aplicó medidas militares, cosa a la que él se oponía. Se creó un Comité de Huelga de STECEL, que pidió a los trabajadores del ramo no ir al trabajo (días después sería disuelto oficialmente el sindicato de parte del Ministerio de Trabajo). Finalmente, tanto el FAPU

como la UDN condenaron las medidas oficiales y la captura de los dirigentes, y apoyaron a éstos y al sindicato.

Por su parte, los acontecimientos de la primera parte del mes, que no estuvieran relacionados con el paro, seguían la misma tónica de otros meses, como la renovación por 6a. vez consecutiva del Estado de Sitio; la campaña que venía desatando la Democracia Cristiana oficial en torno a la Cruzada de la Paz y al Diálogo (incluso con el FDR), para facilitar unas prontas elecciones que obligó a tomar partido por esas medidas a algunos miembros de la Junta y a altos militares. Majano opinó que había que dialogar con todos, incluso con los que no están en el FDR. Abdul, en cambio, afirma que los del FDR son subversivos y que no quieren diálogo sino la toma del poder militarmente, que ya estuvieron en el gobierno y lo único que hicieron fue disolver ORDEN; que en cambio ya hay diálogo con la iniciativa privada, que ha respondido muy bien, pero que con los extremistas sólo cabe la mediación; finalmente añadió que se iba a aclarar la postura del PDC (que había sido un "lapsus linguae"), para evitar malos entendidos. Morales Ehrlich, por su parte, diría que la Junta era transitoria, y que en agosto convocaría a elecciones y se nombraría el Consejo Central de Elecciones. García afirmaba que la Fuerza Armada garantizaría el proceso electoral, que la izquierda no quiere porque sabe que lo perdería.

La represión, que hubiera seguido a los mismos niveles de meses anteriores, se incrementó con el paro y sus secuelas. Antes de eso, ya AMES envió una carta a la misión de la ONU en El Salvador denunciando el genocidio en el país, y otra similar envió el FIDH. Aparece en los medios de comunicación que hay miles de refugiados que acuden a los cuarteles y a los centros oficiales (sobre todo de Torola y Perquín, Aguilares, Ilosbasco, San José Guayabal y Guazapa), acontecimientos que coinciden con operativos militares en dichas zonas, por lo que se opina que son gente adicta al gobierno y a ORDEN, a las que se manda salir y refugiarse ahí para dar luego batidas arrasadoras. Mientras el COPREFA anuncia la intensificación de los patrullajes, exhorta a utilizar los teléfonos de denuncias. En el Departamento de La Unión siguen formando "Guardias Civiles" con reservistas que reciben equipos militares del Servicio Territorial y de los Cuerpos de Seguridad, y los vecinos corren con los gastos (ya las hay en Nueva Esparta y en Amorós, y se están organizando en Concepción de Oriente, Conchagua, Polorós, Intipucá y otros).

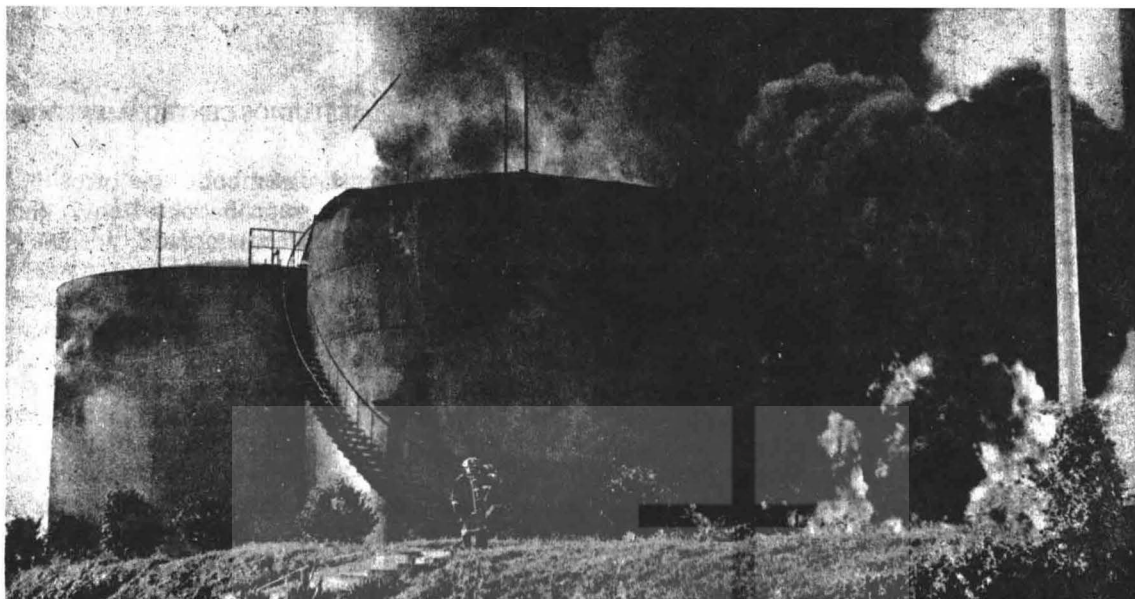
Los datos de víctimas en el mes se pueden reducir a los siguientes: 1.956 muertos por razones de violencia política en el mes, de los que 798 cayeron a manos del gobierno y de la derecha (705 de la población civil y 93 combatientes de las organizaciones político-militares), y 1.158 a manos de la izquierda (314 ajusticiados y 844 efectivos militares de la Fuerza Armada). Esto hace que por primera vez en el año los caídos de la derecha superen a los de la izquierda, lo que denota una nueva fase en la lucha revolucionaria. Pero si tomamos en cuenta nada más las "bajas" de ambos lados (muertos y heridos), mientras la izquierda reconoce haber tenido 106, el gobierno ha tenido 844 efectivos muertos en el mes, 140 heridos, y 698 que no se ha determinado si han muerto o sólo heridos, para un total de 1.682; lo que muestra la superioridad de eficacia militar de la izquierda en el mes, por lo menos en cuanto a bajas se refiere, y aceptando sus datos. En agosto las organizaciones político-militares realizaron 993 acciones en toda la república, con una concentración en el Departamento de San Salvador de un 44% de las mismas; por su parte hubo también 163 acciones de contrainsurgencia de parte de la institución armada del gobierno.

Sería demasiado prolijo, e innecesario, detenerse a analizar la conflictividad laboral en el

mes, y los pleitos, denuncias, pliegos de peticiones, huelgas, etc. planteadas en infinidad de empresas e instituciones, así como la lucha por la abolición del Decreto 296 que fuera aplicado con rigor pero selectivamente. La mayor relevancia la tuvo el Paro Nacional, así como el corte de energía eléctrica, con todas las consecuencias que se siguieron de ambos hechos sobresalientes, y que ya se han analizado anteriormente. Como consecuencia del paro fueron despedidos, de acuerdo a denuncias de los sindicatos, 472 trabajadores (273 del sector privado y 199 del público), se les descontó el salario a 56, se suspendió por 6 meses a 3 personas, y se cerraron 3 fábricas. STISSS y AMOISSS dirigen una carta a la Junta en la que denuncian anomalías en la Dirección del Seguro. UCS solicita al ISTA la reevaluación de las propiedades adquiridas y que no se devuelvan a los antiguos dueños (ha habido algunos casos en que se ha hecho esto), y que se les dé tres años de gracia para el pago de las propiedades. El Seguro Social, por un lado, es extendido a 9.000 empleados de la zona oriental, así como a las esposas y compañeras de vida de los asegurados, pero asegura a un tiempo que 30.000 usuarios han quedado cesantes en el año por el cierre de fábricas, almacenes, etc.

Hay dos sectores en los que la crisis se vuelve álgida. La primera es la del transporte colectivo, pues además de la quema y deterioro de muchas unidades no progresan lo suficiente las conversaciones entre los empresarios y la Dirección General de Transportes ni con el Ministerio de Economía a pesar de la promesa de indemnización por las unidades perdidas y de la subvención en el combustible para mantener los precios de los pasajes; por otro lado, el asesinato de choferes y de otros trabajadores del ramo (sólo en la ruta 7 hubo en pocos días 5 dirigentes sindicales asesinados) obliga a la suspensión de varias rutas. El otro sector es el del magisterio nacional: 83 maestros han sido asesinados, 4.000 amenazados, hay 514 escuelas cerradas en el país, el 85% de las escuelas de la zona oriental están cerradas, y hay un 45% de deserción escolar en todo el país; esto obliga a ANDES a emplazar al Ministerio de Educación con una serie de demandas, y amenaza con la finalización del año escolar a varios meses de antelación del período oficial.

Por supuesto, la economía, que ya tenía una curva descendente muy pronunciada, no podía reverdecer en tales circunstancias. Entre las fiestas agostinas y patronales de inicios del mes, el



TANQUES DE CEL INCENDIADOS

Paro Nacional a mediados del mismo, y el corte de energía eléctrica por 24 horas una semana después, no era de esperar un repunte de la economía.

La contracción económica en todos los sectores es tratada de compensar con un Programa de Reactivación Económica, y con el Plan de Emergencia, que nunca llegan a operativizarse. Se anuncia una línea especial de crédito para el sector industrial, pero FENAPES se queja de que no reciben los beneficios prometidos. La descapitalización del país motiva el que no haya divisas, y no se puedan adquirir las materias primas necesarias para la industria y el comercio, por lo que el gobierno aprueba una línea de crédito a las empresas que exporten.

Aunque se hable oficialmente de una cosecha record, siguen escaseando los granos básicos, principalmente el frijol, por lo que el IRA dice que va a importar 22.000 qq. del grano de USA, y se inicia una campaña de incentivos a la siembra del mismo. El café sigue con precios bajos en el mercado mundial, y se mantienen cerradas las ventas; pero la Junta emite el Decreto 279 por el que se aprueba el pago del valor nominal de las acciones serie A, B y C de la Compañía Salvadoreña del Café, lo que ratifica la tesis de algunos empresarios privados de que esa Compañía se había creado con fondos privados. La roya del café, se dice, sigue extendiéndose, y no se le pone remedio. Se cosechará un 31% menos de caña de azúcar, a pesar de que los precios internacionales están muy altos, y esto puede hacer escasear el producto en el interior o encarecerlo. De algodón se han sembrado miles de manzanas menos que antes.

La situación de El Salvador —ya lo hemos visto a lo largo de estos meses— tiene implicaciones internacionales muy importantes, por lo que los demás países no sólo del área, sino del continente y de Europa principalmente, se alinean a favor de cada uno de los dos proyectos en contienda, y los propulsores de ambos proyectos buscan afanosamente sus alianzas internacionales. En el área centroamericana las posturas están bien definidas: Guatemala apoya la represión aquí, como retaguardia de su propia lucha, que se va recrudeciendo día a día y aumentando la violencia política a cotas desesperadas. Honduras está acelerando la pacificación con El Salvador, presionado por intereses ajenos a ella, y concentra sus tropas en la frontera para hacerle el juego a la represión salvadoreña e impedir la migración masiva (ya hay más de 10.000, de acuerdo a fuentes oficiales de aquel país). Costa Rica sigue apoyando a la Junta, pero su situación interna se agrava tanto por las huelgas bananeras y las solidarias, en las que hay un muerto y varios heridos graves, como por la crisis económica que pone en riesgo inminente la devaluación de la moneda y hace que se tomen medidas drásticas de limitación de las divisas a 5.000 dólares cada vez para las importaciones.

El gobierno de El Salvador intenta ampliar su respaldo internacional. Una delegación de la Democracia Cristiana Alemana visita el país y es declarada “huésped de honor”; se reúne con dirigentes de la DC salvadoreña, con Duarte y con Viéytez, y se deshace en elogios para el proceso. (Por su parte, otra misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos visita Guatemala y El Salvador, se detiene a ver la realidad y

a hablar con todos los bandos, es testigo de la barbarie, y denuncia el terror en Guatemala y la guerra civil y de exterminio en El Salvador, a manos del gobierno, de los militares y de los grupos para-militares, equiparándola a Vietnam). Morales Ehrlich acude una vez más a Costa Rica a entrevistarse con Carazo y a fortalecer los vínculos de apoyo y amistad. Viéytez va a Washington a negociar con el BID un préstamo de 160 millones de dólares y otro con el Banco Mundial por 110 millones de dólares para 1981-82, que ayuden a reactivar los programas de desarrollo económico y social. El Canciller salvadoreño acude a República Dominicana, y es invitado a Brasil. Ya hemos visto las manifestaciones del embajador americano en cada oportunidad que se le presenta de apoyar a la Junta y de insistir en la debilidad y el fracaso de la izquierda; Le Monde publica declaraciones suyas en tal sentido, y la convicción, de que lo peor ya está superado y que el año próximo será de franca recuperación y tranquilidad. El Departamento de Estado indica que "El Salvador podría beneficiarse de una ayuda norteamericana multimillonaria, originalmente destinada a Bolivia, y suspendida a raíz del golpe militar del mes pasado; el aumento proyectado será de 50.4 millones de dólares, la

descongelación del desembolso de otros 36.7 millones en préstamos aprobados a Bolivia antes del golpe está siendo contemplada; además de una ayuda financiera directa, el Departamento de Estado está tratando de reactivar las operaciones del Banco de Exportación e Importación en El Salvador para dar un nuevo aliento a la Empresa Privada del país y al comercio entre El Salvador y Estados Unidos" (Diario de Hoy, 29-8-1980).

Por su parte, el FDR y sus simpatizantes intensifican la campaña de apoyo internacional en todos los planos a su alcance. La Prensa y Tribuna Sindical, en Honduras, y Uno Más Uno en México, acusan a Honduras de militarizar la frontera, amenazar con intervenir en los bolsos en disputa, y de participar en la represión en Chalatenango (Sumpul) y en el tránsito de armas para el gobierno de El Salvador. Cienfuegos, un alto dirigente izquierdista, denuncia los planes de intervención americanos por medio de otros países y de creación de una fuerza de paz. La UPI informa de maniobras de invasión en Puerto Rico (operación "Universal Track-180") como preparativo para El Salvador. Amnistía Internacional en España se muestra preocupada por la

Fiscalía Militar en caso "apagón"

—Página 2—



ayuda en "seguridad" del gobierno de USA para el de El Salvador. Una delegación del más alto nivel del FDR (Ungo, Fabio Castillo, Mayorga y Zamora) acude al Departamento de Estado para exigir "neutralidad", y denuncia (en una entrevista) la concesión de 5.7 millones de dólares en armas, la presencia de 36 asesores militares, y el envío de equipo militar desde California, Nueva Jersey y la Zona del Canal de Panamá, pero sostiene que el pueblo armado vencerá. Cincuenta personas se toman la embajada de Venezuela en Alemania denunciando el apoyo al gobierno salvadoreño, y el gobierno de Venezuela dice que no apoya a la Junta. En fin, a medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos, hay un miedo general en América Latina (contrapuesto a la alegría de los militares duros) de que las gane Reagan y se acentúe más la represión, si bien es cierto que no cambiarán mucho las cosas, pues si Carter denuncia las dictaduras, indirectamente parece sostenerlas por prestar éstas un gran servicio a su país.

Pero hay dos acontecimientos relevantes en este aspecto internacional. El primero es el asesinato del periodista mexicano Ignacio Rodríguez Terrazas, ante el que se dieron versiones contrapuestas: el gobierno sostuvo que fue contingencial y por exponerse al peligro, los corresponsales nacionales y extranjeros, así como el gobierno mexicano, lo negaron y en mayor o menor grado acusaron de premeditación, por lo que el gobierno de El Salvador pidió vinieran a investigar, y el de México retiró a su embajador en el país; pocos días antes había escrito un artículo sobre la represión y el genocidio en El Salvador.

El otro hecho fue la ofensiva diplomática del FDR con ocasión del paro. Ungo acusa a Venezuela de intervenir política y militarmente, y adiestrar policías y militares, así como de presionar a Colombia para influir en el Pacto Andino a favor del gobierno. Algo similar sostiene Lara Velado en su visita a Venezuela y en sus

conversaciones con altos dirigentes de la Democracia Cristiana, incluido Calvani; y el delegado del FDR en la reunión de las Agencias de Noticias de Países No Alineados. Las LP-28 denuncian la presencia de mercenarios gringos en Morazán, provenientes de cuarteles y campamentos en el oriente, y de mercenarios y el ejército hondureño que intervienen en Morazán. El FDR denuncia la preparación de la intervención armada de USA, y eso y más denuncia Oqueli en Grenada. En una entrevista concedida por Uno Más Uno a dirigentes guerrilleros salvadoreños, estos afirman que la intervención gringa ya comenzó en El Salvador. Muestran la solidaridad con el FDR 11 países de Europa, más el gobierno de Grenada y el Comandante nicaragüense Daniel Ortega. En fin, se hacen eco de tales denuncias: Rangel en Venezuela (diputado y excandidato a la Presidencia), "El Comercio" de Perú en su editorial, la Agencia TASS, el IV Congreso Centroamericano de Sociología, Sandra Price (monja norteamericana que fue detenida por la Policía Nacional y puesta en libertad por presiones de la embajada), y el Comité Hondureño de Solidaridad con El Salvador, que denuncia la complicidad del ejército de su país, el plan de penetración del ejército y guardia salvadoreños en Honduras para atacar desde allí a la guerrilla e instalar a ORDEN para que reprima a los fugitivos, y el pacto de paz acelerado para coordinar ambos ejércitos en la represión.

Así es como transcurre un mes más de incertidumbre, incremento de la guerra, tanto de insurgencia como de contrainsurgencia, se inician nuevas fases del conflicto, y el pueblo sigue muriendo, ante la complicidad de unos países, la curiosidad e indiferencia de otros, y la indignación de todos los que tienen sentimientos humanitarios.

Eugenio C. Anaya, h.